

Crónica

Á

lvaro Miranda

A

driana Grosso

La demencia después del exterminio

Álvaro Miranda – Adriana Grosso



Colombia es un país de locura vergonzante. La suma de tantos años de delirio ha producido secuelas en la población común. La pesadumbre que deja la violencia no solo se remite a hospitales, cárceles o cementerios donde, por lo general, hay tratamiento y reconocimiento profesional o de medios. La pesadumbre también se instala con fuerza, pero con silencio, en calles y parques. El presente artículo muestra cómo después del exterminio de más de 5 000 militantes de la Unión Patriótica, partido de izquierda que buscaba la paz, en la gente de la calle ha quedado la marca, el eco de tales hechos trágicos. Sobrevivientes o no, testigos presenciales o ajenos, viven sin saber por qué, una vida gris, decadente, producto imborrable de aquellos días que no han terminado de irse, tal como sucede con Ricardo Cheliá, quien sufre esta pesadilla en Fusagasugá.



La noche antes de que la mataran, Blanca Cecilia Palacios había dado de lactar a su hijo de dos meses de edad. El niño había llorado por cólicos, pero al poco tiempo se durmió. Era una mujer dedicada a los trabajos del hogar y nunca se había relacionado con la política.


—Voy a dormir   lijo a su esposo Rodrigo Barrera, que veía la televisión —me duele la cabeza 


Ella se pasó la mano por el lugar donde tenía el dolor, el mismo en donde unas horas después, a las 2:45 a. m. recibiría un disparo mortal.

En esa madrugada, sólo se oía el silencio que se había posesionado del barrio popular Los Comuneros, en la población de Fusagasugá, a dos horas de la capital de Colombia, Bogotá. Lo que se alcanzó a escuchar de inmediato fueron los motores de dos camionetas y el golpe que daban las botas de treinta militares que se bajaron de ellas. Algunos testigos que habían sentido la llegada, vieron cómo aquellos hombres también cargaban dos cadáveres. Eran dos personas sin vida que hacía unos pocos minutos habían ajusticiado sin fórmula de juicio, y cómo tales cuerpos eran para ellos un estorbo, los depositaron



en la entrada de la casa que ahora asaltaban. Al estilo comando, rodearon la pequeña edificación y de un golpe derribaron la puerta de la entrada. Se escucharon gritos.

—Al piso rociferó el subteniente Cruz, quien practicaba el registro y el allanamiento ilegal. El sargento Ramírez y el resto del personal uniformado que lo acompañaban encañonaron a la familia asustada.

—Al piso, repitió  La familia fue obligada a tenderse boca abajo. Los hombres de la casa estaban casi desnudos, con una pantaloneta como pijama que usaban para dormir. Las víctimas no tenían arma alguna en sus manos o en la casa. A pesar de ese estado de indefensión se dio inicio a la ejecución. No se trataba de un fusilamiento contra una pared, sino contra el suelo. El primero en morir fue Antonio Palacios Urrea, un humilde trabajador de 65 años, jefe de hogar y a quien sus victimarios acusaban de ser un simpatizante de la Unión Patriótica UP, un partido legal de los grupos de izquierda colombiana, que se constituyó entre ideólogos, intelectuales, profesores, sindicalistas y trabajadores en general que tenían una meta concreta: la búsqueda de la paz en Colombia.

Siguieron a la inmolación los tres hijos de Antonio que dormían en habitaciones contiguas: Camilo, estudiante de

matemáticas de 27 años, Janeth, de 19, y Blanca Cecilia de 17, quien llena de pánico cuando vio caer muerto a su esposo Rodrigo Barrera, tomó a su hijo en brazos y buscó una salida de aquel lugar para salvar su vida y la del recién nacido. El niño lloraba por

el brusco despertar. La muchacha alcanzó a correr algunos pasos. Una bala en su cabeza la hizo rodar al suelo delante de su madre que la contemplaba sin poder hacer nada, solo abrazar a dos niños del hogar que habían sobrevivido a la masacre.

Veintidós años después de aquella oscura noche del 21 de agosto de 1991, uno de los testigos, el señor Ricardo Cheliá, estaba sentado en una banca del parque Central de Fusagasugá. Tenía frescos esos recuerdos, a pesar de que el tiempo se metía por toda su piel que se arrugaba bajo su traje de tela delgada y oscura y sus cabellos que se encanecían bajo su gorra negra. Era un hombre más, de esos que no tienen norte ni sur después de vivir ciento de posibilidades de desastres por la guerra política que se inició en Colombia, antes del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en la llamada Calle Real de Bogotá, el 9 de abril de 1948, y cuyo

asesinato hizo que la ciudad fuera incendiada por la furia popular y que la violencia se mantenga activa hasta el presente.

“Me duele la cabeza”, repetía Cheliá la queja que la noche previa a su muerte había



En esa
 madrugada, sólo
 se oía el silencio
 que se había
 posesionado del
 barrio popular
 Los Comuneros,
 en la población
 de Fusagasugá,
 a dos horas de
 Bogotá.

dicho Blanca Cecilia al tratar de ver por última vez a su hijo de dos meses de nacido. Era como si aquella frase tejiera un lazo invisible entre la tragedia de aquel año y la mezcla en sus días, semanas y meses del recuerdo vivo en su presente del 2013.

La muerte de Blanca Cecilia Palacios, sus hermanos y su padre se había convertido para Ricardo en un referente que a su vez lo jalónaba a su propia historia. A mediados de los años cincuenta, siendo un niño, tuvo que huir de su casa incendiada por los enemigos políticos de su padre, un emigrante árabe que había llegado a Colombia a aventurar en el campo, a realizar molienda de caña y producir ese dulce grande llamado panela.



Cheliá lleva sobre sus 66 años otras historias. A veces, muchas personas no conocen ni un muerto de la furia política que ha vivido el país; otros, tienen aún abierta en su memoria el asesinato de algún conocido, de algún familiar. Es curioso cómo en esta región de Fusagasugá, situada en el Sumapaz, centro del accionar de la guerrilla, esos entre planos de vidas tienen enlaces con muchas otras muertes o pasan en blanco, sin ningún episodio de víctimas que recordar.

Matar por matar, desde sus inicios, se volvió un asunto promovido por el Estado, los particulares, los grupos organizados, los gremios de ganaderos, comerciantes y de criminales a sueldo.

Tocar la puerta de cualquier casa y disparar para asesinar no fue solo asunto de la familia de Blanca Cecilia Palacios. Ha sido un asunto que ha dejado como herida abierta de millones de dolores y diferentes escalas de presentación criminal.

La familia Palacios, de la UP, fue acusada de pertenecer al grupo armado de las FARC, sin serlo. La prensa nacional registró para aquel año de 1991 lo que más tarde comenzó a llamarse falsos positivos; es decir, realizar asesinatos de inocentes para cobrar por ello un premio oficial en dinero y medallas por acabar con personas que ellos denominaban “peligrosas”, a las que muchas veces se les preparaba escenario para hacer una falsa culpabilidad sobre acciones nunca cometidas por las víctimas, acusadas de pertenecer a grupos por fuera de la ley.

Mientras Ricardo Cheliá, sentado en la banca del parque, veía revolotear en círculos a cientos de palomas espantadas y recordaba en voz alta, cómo la Décima Tercera Brigada del Ejército, en un comunicado dado por el comandante de esa unidad militar, dijo que habían acabado con activistas del Frente 15 de las FARC. Las tropas oficiales, según el

comunicado, habían sido recibidas a fuego por los “subversivos” que en ese momento se hallaban en la casa.

La población de Fusagasugá dejaba trascorrir los días dentro de una cotidianidad de cultivar flores, sembrar café, recolectar habichuelas y frutas del trópico, como mangos o mandarinas. Todo el vecindario del barrio Los Comuneros nunca entendió cómo había justificado el Estado aquella masacre, a vecinos y amigos inocentes. Los culpables, diecinueve meses después, fueron sentenciados a prisión.

La mirada que Cheliá hacía sobre la masacre de Fusagasugá era el resumen de cientos más que le ha correspondido vivir al país, desde hace más de setenta años ininterrumpidamente. El hombre de la banca del parque, de traje y cachucha negros, es un ser perdido en un maremágnum de episodios que él, en su sencillez de vida, no puede entender. Existe un tejido enorme de tragedias que el descendiente de árabes apenas vislumbra como ruedas sueltas.

La trama de la violencia tiene proporciones enormes, que, hasta ahora, la historia ha venido concatenando en la memoria a través de publicaciones escritas, de radio o televisión. Cheliá, como millones de colombianos más, navega al garete en medio de personas de todas las condiciones que fueron protagonistas y o no del proceso nacido del deseo de participar políticamente en paz como era la propuesta de la UP. Se trataba de luchadores sociales que venían de organizaciones legales de izquierda como Leonardo Posada, representante a la Cámara, un joven abogado quien quería leerse todos las novelas del mundo, y que fue asesinado en 1986, en la ciudad petrolera de Barrancabermeja, antes de posesionarse en su cargo.

En enero del mismo año, el turno trágico fue para Gildardo Castaño Orozco, líder

sindical y concejal de la ciudad de Pereira, quien cayó víctima de un atentado criminal, ejecutado por sicarios en moto muy cerca de su casa.

En octubre de 1987, el candidato presidencial del año anterior por la UP, Jaime Pardo Leal, después de hablar con un fontanero para que arreglara la presión del agua de su pequeña casa campestre, fue asesinado en plena carretera rumbo a la capital del país por sicarios, ante la mirada de su mujer y sus hijos.

El 3 de marzo de 1989, las balas cayeron sobre la delgada humanidad de José Antequera, abogado, bailador de la música del Caribe, dirigente de la Juventud Comunista, quien fue asesinado en el mismo aeropuerto, en el de Bogotá, cuando saludaba al precandidato liberal Ernesto Samper, quien resultó gravemente herido.

El 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa fue asesinado en el mismo terminal aéreo de Bogotá, mientras esperaba su vuelo, acompañado de su esposa. Ese día, un joven sicario sacó una ametralladora Mini Ingram 380 y disparó contra el candidato a la presidencia de la Unión Patriótica, quien no había dudado en continuar con la organización que Pardo Leal dirigía hacia un año al momento de ser asesinado. Las últimas palabras de Jaramillo Ossa, cuando yacía herido en brazos de su esposa, fueron: “Mi amor no siento las piernas. Estos hijueputas me mataron, me voy a morir. Abrazame y protégeme”.

La muerte parecía haberse montado en un carrusel que no se cansaba de realizar sus giros sangrientos. A veces, los promotores eran los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, como en el caso de la familia de Blanca Cecilia Palacio o de criminales de las Autodefensas de derecha, convertidas en narcotraficantes.

Ricardo Cheliá, como miles de colombianos del común, sentía en su vida una extraña sensación que no podía explicar, pero que se manifestaba como un actuar cruel y sistemático. Para quienes lo podían expresar, era como si permanentemente se viviera sobre un barril de pólvora. Alguien, un alguien que nadie sabía dónde y cuándo, podía salir, buscaba el momento secreto y clandestino de colocar una línea de detonante en cualquier esquina del país, para encender el fuego que debía producir la explosión.

A pesar de la zozobra de los crímenes selectivos, de los carros bombas en calles, edificios y centros comerciales, la vida en

Colombia se imponía. Para los cientos de hombres y mujeres como Cheliá, la existencia tenía un tufillo a muerte en medio del agitar diario de almacenes de comercio, escuelas, hospitales, plazas de mercados, autobuses, iglesias o cantinas. Uno, dos, cientos, miles de muertos tenían la “suerte” de ser encontrados o miles se perdían en campos y selvas dentro de una fosa común. Casos hay de casos entre todos los casos. Un ejemplo tomado al azar está en Ana Fabricia Córdoba, militante de la UP, a quien le correspondió vivir todas las violencias que ha tenido Colombia. Al igual que Cheliá, cuando niña fue sacada de su tierra natal por el



Colombia, para el descendiente de emigrante árabe, era un país de nómadas, de desplazados por la violencia.

enfrentamiento de los dos partidos tradicionales; a su esposo, en el 2000, lo mataron los paramilitares por ser miembro de la UP y tuvo que recoger el cadáver de su hijo Johnatan, después de ser acribillado en las calles de Medellín. A él y a un amigo lo montaron a la patrulla de la policía número 301384 y se pusieron en marcha. A eso de las 9 p.m. llama a su madre Ana Fabricia. Ella cuenta: “Estaba asfixiado del susto y me decía que lo iban a matar”. Al día siguiente, los dos jóvenes aparecieron muertos. A la líder Ana Fabricia, al igual que Blanca Cecilia, un hombre le segó la vida de un disparo en la cabeza, en junio del 2011, la misma semana en que el presidente Juan Manuel Santos sancionaba la Ley de Víctimas.

El sol de Fusagasugá estaba atemperado en el momento en que Ricardo Cheliá entró en un mutismo total. Se metió en sus pensamientos, con una mirada fija donde no veía a los vendedores ambulantes de conos, globos inflables. Sólo escuchaba y entendía a las palomas grises que picoteaban o dejaban que sus alas las llevaran de un lugar a otro del parque central.

—Así volaron todas al ver que las pequeñas aves tomaron un amplio vuelo para dar sobre aquel espacio que tenía, a un lado la iglesia de dos torres de Nuestra Señora de Belén y en sus otros costados, el Centro Administrativo Municipal, bancos, joyerías, papelerías o cafeterías. Cheliá

tenía en su hablar los éxodos vividos por él desde la infancia, en la finca de su padre y después por los diversos lugares donde llegaba a buscar algo que hacer. Colombia, para el descendiente de emigrante árabe, era un país de nómadas, de desplazados por la violencia.

—Mi padre tuvo que dejar el negocio del campo ante las presiones de aquellos del gobierno del dictador Rojas Pini-lla, Fabricia.

Ahora la situación era similar, pero con variantes en los señalamientos que originaban la violencia. A mitad de siglo XX Cheliá había sido víctima inocente del enfrentamiento partidista entre conservadores (trapo azul como símbolo heráldico) y liberales (trapo rojo como símbolo heráldico). A partir de la década de los ochenta, el giro lo seguía marcando el conflicto por la tierra, pero con consecuencias políticas entre sectores radicados en las armas que seleccionaban sus víctimas, en ciudades y campos.

Los miembros de la UP y de otras organizaciones sindicales y demócratas comenzaron a abandonar el país, ante el riesgo de caer muertos. La fatalidad para quien pensara diferente se extendió hasta los años noventa. No había resta, sino suma en cada atentado: 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes de la UP asesinados. En



El vecindario del barrio Los Comuneros nunca entendió cómo había justificado el Estado aquella masacre, a vecinos y amigos inocentes.



total más de 5 000 militantes y simpatizantes muertos; es decir, el fin de la organización.

—¿Sabe por qué uso ropa negra? preguntó Cheliá sin quitar su mirada de aquellas aves enlutadas. —Porque en este país ha habido muchos muertos por culpa de esta guerra.

Cuatro o cinco generaciones de colombianos no han podido vivir un año en paz, desde 1931 a 1939, cuando en Gachetá y Capitanejo, se dio inicio al conflicto con exterminio de la población conservadora y liberal, hecho que prendió desde entonces la chispa de las masacres políticas. La sola estadística reciente, divulgada desde 1985, es aterradora. Ricardo sabe que desde hace muchos años algo anda mal, pero al igual que muchos otros colombianos no pueden precisar las causas o dar soluciones y aún más, considera que ese estado de alteración que acaba con la paz diaria y el derecho a la vida es connatural.

En un revistero cercano de supermercado, a mano de cualquiera, aparece la revista *Semana*. La publicación sale cada siete días con tiraje promedio de 52 800 ejemplares y es una de las de mayor circulación de un país. Colombia se acerca a los 50 millones de habitantes y, sin embargo, el nivel de lectura de los medios no es generalizado. Por ello, solo la leen sectores poblacionales de nivel alto, intelectuales y profesores interesados en la economía, la política y la vida rosa. Personas como Cheliá, no sabe que existe porque nunca se abastece de víveres, como tampoco visita a los llamados centros de estilistas o peluquerías para un arreglo de cabellos y es en esos lugares donde por lo general las personas del común pueden ojear noticias. Según la revista en mención, desde 1985 al 31 de marzo de este año, se han registrado 5 405 629 víctimas de la violencia. Blanca Cecilia Palacios forma parte

de la estadística de 2 683 335 mujeres asesinadas. Su padre y hermanos están en la trágica cuenta:

Niños menores de 12 años: 1 163 218.

Sindicalistas asesinados entre 1978 y 2012: 2994.

Defensores de derechos humanos asesinados: 299.

En 2.087 masacres entre 1983 y 2011, fueron asesinadas 9509 personas.

Periodistas asesinados desde 1977: 137.

Los secuestros extorsivos entre 1996 y 2002 fueron 16123.

Colombianos que salieron del país por razones de la guerra: 395 577.

Funcionarios, empleados o candidatos públicos asesinados: más de 3000.

Personas que han sufrido desplazamiento forzoso desde 1985: 4 o 5 millones.

Personas afectadas por las minas antipersonales: 10 272.

Indígenas asesinados: 2628.

Todos estos actos violentos de la guerra que actúan como tsunamis tienen de continuo otros movimientos de ola de menor altura, pero no por lo mismo menos peligrosos. Blanca Cecilia Palacios fue una víctima de los muchos tsunamis que se siguen dando. Sus vecinos sobrevivientes, de una u otra forma, siguen siendo salpicados por innumerables gotas de sangre que llegan a su vivir, a su pensamiento, a su modo de actuar o silenciar.

Cheliá se ha levantado de la silla del parque. Camina por entre las cientos de palomas que apenas le dan paso con un pequeño salto. No sabe a dónde ir. Al fin y al cabo la guerra que busca su fin, todavía no muestra un destino de paz. ■